

REPORTE SEMESTRAL DE CONFLICTOS

SEMESTRE II- 2019

REGIÓN CAJAMARCA

Según el Informe del Banco Central de Reserva, en agosto, la actividad minera en Cajamarca registró una reducción de 7,8 por ciento interanual, explicada por la caída de oro (-5,7 por ciento) y cobre (-17,8 por ciento). No obstante, la producción de plata creció (6,5 por ciento). La disminución en la producción de oro, responde a una menor extracción por parte de Minera La Zanja (-73,3 por ciento), Minera Yanacocha (-6,3 por ciento), Gold Fields La Cima (-19,5 por ciento) y Compañía Minera Coimolache (-5,2 por ciento). Sin embargo, el aumento en la extracción de oro por parte de Shahuindo (93,7 por ciento) atenuó la caída del mineral. En tanto la menor producción de cobre, se asocia a disminución en la extracción por parte de la empresa Gold Fields La Cima (-17,8 por ciento).

Según este mismo informe, la actividad agropecuaria creció 9,2 por ciento interanual en agosto, como resultado de la mayor producción agrícola (12,2 por ciento) y pecuaria (3,8 por ciento). En los primeros ocho meses de 2019, el sector agropecuario acumuló un crecimiento de 5,7 por ciento.

Aún con esta dinámica, Cajamarca sigue reportada como la región más pobre del país, de acuerdo a los estudios de abril del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y desde los niveles regionales y nacionales, se sigue diseñando estrategias para la superación de esta situación. El acceso a servicios básicos, la inclusión productiva y financiera, y la gestión de riesgo de desastres, son algunas de las prioridades señaladas por el gobierno nacional, para ayudar a la superación de esta situación de pobreza en la región. Proveer de programas de ampliación de servicios básicos como agua potable y electrificación rural, en coordinación con los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y de Energía y Minas, fueron algunos de los ofrecimientos por parte del Ejecutivo anunciadas durante la VIII Semana de la Inclusión Social, realizada en Cajamarca en octubre pasado.

Cajamarca sigue siendo una de las regiones donde se concentran los proyectos de inversión más importantes del país, pero de igual forma es uno de los lugares con alta incidencia de conflictos. La Defensoría del Pueblo, en su último Informe de setiembre, No. 187, ubica a Cajamarca en un séptimo lugar de regiones con mayor conflictividad, con 11 conflictos; aunque podríamos estar en un puesto superior considerando la existencia de algunos conflictos más detectados en desarrollo.

Aunque los proyectos de mayor envergadura están paralizados o demorados en su ejecución, tipo Conga y Michiquillay, la resistencia de los movimientos sociales, siguen girando en torno a evitar el avance de los mismos. Los cuestionamientos siempre se centran en los impactos generados y no atendidos, es la principal causa de la misma.

El Estado sigue mostrando serias limitaciones para atender los conflictos, con alguna estrategia preventiva o de gestión. Por su parte, las empresas siguen intentando persuadir

a la población, con viejas estrategias de relacionamiento, basadas en asistencialismo; ello no solo genera dependencias sino una relación poco constructiva y de confianza con la comunidad. Los discursos negacionistas respecto a los impactos causados, se complementan con otros relacionados con la propuesta de “Clúster mineros”, apostando por modelos de agrupamientos de grandes proyectos de explotación. En agosto del presente año, la Presidenta de la CONFIEP, María Ysabel León, llegó a Cajamarca, y públicamente volvió a atribuir los conflictos a “intereses ideológicos”. No obstante, la resistencia de la población es evidente; las mismas, junto a las situaciones coyunturales de fluctuación de precios internacionales de los minerales, no han dejado que este tipo de propuestas se concreten.

Mientras tanto los conflictos continúan, identificándose hasta tres tipos: los conflictos por impactos suscitados con la actividad minera; conflictos por expansiones de estas actividades extractivas, y conflictos por incumplimientos de acuerdos por parte de las empresas.

Conflictos por expansiones mineras

Durante este año, la pretensión de expansiones de esta actividad se está generando no solo en el campo de la minería formal, sino también de la informal, que avanza frente a una inacción y pasividad del Estado que no ha realizado acción alguna para controlarla.

Respecto a la minería formal, se ubican tres puntos importantes de desarrollo de conflictos. El primero en la zona del Valle de Condebamba, que comprende varios distritos de las provincias tanto de San Marcos como de Cajabamba, donde empresas como Pan American Silver y Shahuindo están intentando avanzar con procesos de exploración. Esto ha generado un proceso de resistencia de las comunidades, cada vez más consolidado en una organización social de defensa del valle, que en este periodo en particular, ha realizado varias acciones importantes de protesta, incluyendo una contundente marcha en Cajamarca, durante el mes de setiembre. De igual forma han realizado inspecciones donde las empresas empiezan a perforar, así como han citado a reuniones a varias autoridades, en particular las relacionadas con la gestión del agua, como la Autoridad Nacional del Agua. Ante la falta de respuestas claras por parte del gobierno, este conflicto tiene un alto potencial de agudización.

Otro de los focos de conflicto es la zona de Hualgayoc, por el anuncio de la apertura de un nuevo proyecto minero denominado Anta Norte, propiedad de la empresa Regulus Resource. Aunque este proyecto está en las inmediaciones de otras explotaciones como Tantahuatay y Cerro Corona, la población se resiste a esta expansión, bajo argumentos de la generación de mayores impactos.

Un tercer punto en donde se desarrollan este tipo de conflictos, es en inmediaciones Cajamarca, distrito de la Encañada, donde Minera Yanacocha, ya asentada en la zona, pretende la expansión con proyectos como Colorado y Sulfuros, que si bien están en la misma huella de la actividad de esta empresa, están siendo fuertemente cuestionados por la población, por los impactos mayores que pueden generar. En este caso se está

observando que la empresa esté utilizando los cuestionables ITS (Informe Técnico Sustentatorios), para modificar de manera sustancial los EIAs del proyecto minero.

De otro lado, Conga sigue sin ser reactivado, y la población de manera periódica sigue reafirmando su resistencia frente al mismo. Durante este período ha habido hasta tres eventos de “inspección” por parte de las comunidades, a las lagunas, para reafirmar su resistencia. La empresa por su parte realiza un intenso trabajo con las comunidades, con la estrategia de apoyos económicos para tratar de convencer a la población de modificar sus posturas.

El otro proyecto importante de expansión minera, con evidentes y cada vez más frecuentes conflictos, es Michiquillay (La Encañada- Cajamarca), de la empresa Southern Perú. Los problemas sociales relacionados al manejo del fondo social continúan, así como los conflictos internos dentro de la comunidad. En setiembre de este año un hombre se encadenó en las oficinas de la empresa en protesta por las irregularidades en el fondo social; además la población está exigiendo cambio del comité de licitaciones.

En cuanto a minería informal, se ha detectado que, sobre territorios de Cajabamba, San Marcos, Chirinos (San Ignacio), y Chumuc en Celendín, avanzan los mineros informales, pese al cuestionamiento y oposición de la propia población local. Los mecanismos de amenaza y violencia con que operan este tipo de actores, han llegado a provocar eventos de riesgo contra la población. Los mineros informales también utilizan el mecanismo de la criminalización contra los líderes sociales, denunciándolos, para neutralizarlos.

Conflictos por impactos ambientales

En este primer semestre del año se han registrado una serie de conflictos de comunidades, contra diferentes mineras que operan en la región, por impactos ambientales generados, principalmente relacionados con contaminación en el medio ambiente, así como respecto a la salud de la población.

El principal foco de conflicto sigue situándose en la provincia de Hualgayoc - Bambamarca, la misma que se caracteriza por ser una zona de pasivos ambientales pero también de nuevos eventos de contaminación ambiental. El área de la mina San Nicolás, es un ejemplo de impactos ambientales. En Chugur, donde están las mineras Gold Fields y Tantahuatay, los ríos Maygasbamba y Arascorgue están contaminados conforme a inspecciones realizadas por la misma OEFA, además los pobladores afirman que al menos 36 canales de riego estarían afectados.

Pese a que hubo una mesa de diálogo impulsada por el Estado par atender estas preocupaciones, la misma no ha dado resultados. De igual forma autoridades del Ministerio de Energía y Minas han estado en la zona, pero no hay acciones concretas para atender este asunto.

En el caso de minera Gold Fields, la cual ha generado uno de los accidentes ambientales más importantes en los últimos meses (derrame de sustancias químicas, en diciembre del 2018),

hasta el momento no ha sido posible de una sanción que la obligue a desarrollar medidas compensatorias y reparatorias. A nivel del Ministerio Público, recién en agosto la fiscalía de Medio ambiente, notificó a las partes del inicio de una investigación.

De igual forma en el distrito de Chugur, donde se concentra gran parte de la población diagnosticada con metales pesados en el cuerpo, se genera un gran descontento y reacción de la población, ante la falta de atención respecto a su salud.

Toda esta situación ha conllevado a los pobladores de Hualgayoc-Bambamarca convoquen a una reunión próxima que se realizará en este mes de noviembre, para tomar la decisión de volver a una medida de fuerza (evalúan incluso entrar a huelga de hambre).

En la zona de Cajamarca, el centro poblado de Huambocancha realizó en setiembre, un paro contra Minera Yanacocha. El principal reclamo es haberlos dejado sin agua producto de la realización y avance de sus actividades.

La Zanja en Santa Cruz, es otro de los proyectos cuestionados por contaminación, la gente sigue denunciando contaminación con relaves, sin embargo no se tiene conocimiento si autoridades como la OEFA están interviniendo ante estas denuncias.

En la zona del Valle del LLaucano, y comunidades del distrito de la Encañada, sigue un conflicto generado por las autorizaciones de agua otorgadas a empresas mineras. Siguen las protestas contra la ANA, pidiendo nulidad de resolución que autoriza a Yanacocha realizar perforaciones en la zona de la laguna de Totoracocha para estudios de agua. Se anuncian nuevas medidas de fuerza frente a la negativa de la autoridad de anular dichos permisos.

Conflictos por incumplimiento de acuerdos

En este período se reportó en Hualgayoc una serie de reclamos contra la minera Gold Fields, por incumplimiento de convenios y acuerdos en perjuicio de la comunidad. Si bien se ha abierto un canal de diálogo con la empresa, la población no descarta continuar con sus medidas de protesta.

Tendencia

Las expansiones mineras tanto de empresas formales como de informales, sin aceptación de la población, está generando un proceso mayor de conflictividad social en Cajamarca, la cual tiene tendencia a agudizarse.



El rol de algunos sectores del Estado como la Autoridad de Agua y OEFA, son de especial análisis; la debilidad de estas instituciones y la falta de credibilidad en relación a ellas, contribuyen a la profundización de los mismos.

En este momento la ausencia de una política para atención de los conflictos y la inactividad del vice ministerio de gobernanza en las regiones para prevenir, gestionar o intentar solución a dichos procesos, son el escenario propicio para que estos se profundicen.